

SEPTIEMBRE 23 DE 1914

55.^a REUNIÓN — Continuación de la 25.^a SESIÓN ORDINARIA

Presidencia del Dr. MARCO AURELIO AVELLANEDA

DIPUTADOS PRESENTES: Acosta, Aguirre (D.), Aguirre (R. M.), Albarracín, Aldao, Alvear, Arancibia Rodríguez, Araya (P.), Araya (R.), Arce, Atencio, Avellaneda (N. A.), del Barco, Barrera, Bas, Bejarano, Beltrán, Bonastre, Bravo, Cabanillas, Cafferata, Camaño, Cantilo, Carballido, Castillo, Corrêa, Costa, Cúneo, Demarchi, Demaría, Dickmann, Drago, Echagüe, Echegaray, Escobar, Frugoni Zabala, Funes (Lindor), Funes (Lucio), Gallo, García, Garzón, Giménez, González Pérez, Hernández, Igarzábal, Jaramillo, Justo, Lagos, Le Bretón, Leguizamón, Linares, López Buchardo, Lugones Vieyra, Marcó, Mariño, Márquez, Massi, Melo, Mena, Mihura, Mora y Araujo, Morán, Noriega, Nougés, Oliver, Olmedo, Ordóñez, Padilla, Paiz, Palacios, Pastor, Pereyra Iraola, Pérez Virasoro, Pinedo, Redoni, Repetto, Rojas, Rolón, Saavedra Lamas, Saguier, Salas Oroño, Salvatierra, Sánchez Viamonte, Santamarina, Saravia, Sempuín, Silveti, de Tomaño, de la Torre, Uriburu, Valdez, del Valle, Varela, Vedia, Vergara, Zaccagnini, Zeballos (E. S.) — AUSENTES CON AVISO: Marchini, Oyhanarte, Paz, Roca, Zavalia Guzmán. AUSENTES SIN AVISO: Bercetche, Carbó, Castellanos, Coronado, Gandolla, Mercado, Pesenti, Riú, Rothe, Santillán, Veyga. — AUSENTES CON LICENCIA: Ceballos, Frers.

SUMARIO No. 55

1.—Despacho de las comisiones.

2.—Peticiones particulares.

3.—Resolución de la Presidencia de la honorable Cámara mandando testar algunas frases de la solicitud presentada por don Gregorio Soler sobre aprovechamiento de las caídas de agua del Salto Grande, en el río Uruguay.

4.—Proyecto de ley del señor diputado Perfecto Araya, fusionando la Dirección general del Puerto en la Aduana de la Capital.

5.—Minuta de comunicación al Poder Ejecutivo, de los señores diputados Vicente C. Gallo y Fernando Saguier, relativa al levantamiento de las vías férreas que unen las estaciones Caballito y Chacarita, en la Capital federal.

6.—Proyecto de ley del señor diputado Enrique Dickmann y otros, disponiendo que el Banco de la Nación entregue al Poder Ejecutivo, en calidad de préstamo, 30.000.000 de pesos moneda legal, para prosecución e iniciación de obras públicas.

7.—Proyecto de minuta de comunicación del señor diputado Juan B. Justo, pidiendo informes al Poder Ejecutivo respecto a la deuda de la Nación. — Se aprueba.

8.—Proyecto de minuta de comunicación del señor diputado Nicasio Salas Oroño, pidiendo informes al Poder Ejecutivo acerca de las escuelas de agricultura y ganadería de la Nación. — Se aprueba.

9.—Moción formulada por el señor diputado Augusto Echegaray para que se trate con preferencia el despacho de la comisión de obras públicas en el proyecto de ley autorizando al Poder Ejecutivo a invertir una suma de dinero en el adoquinado de las calles del puerto de la Capital.

10.—El señor diputado Miguel Laurencena presenta su renuncia de miembro de la honorable Cámara. — Se acepta.

11.—El señor secretario de la honorable Cámara, don Alejandro Sofondo, presenta la renuncia de su cargo. — Se acepta. — La honorable Cámara resuelve fijar la sesión del lunes próximo para nombrar secretario.

12.—Mociones de preferencia, formuladas por los señores diputados Augusto

Echeagaray y Alfredo Demarchi, respecto a los asuntos despachados por la comisión de obras públicas.

13.—Moción formulada por el señor diputado Jerónimo del Barco, para que se agradezcan al señor secretario renunciante, don Alejandro Sorondo, los servicios prestados a la honorable Cámara.

14.—Continúa la consideración del despacho de la comisión de Legislación en el proyecto de ley del señor diputado Vicente C. Gallo, sobre warrants.

—En Buenos Aires, a 23 de Septiembre de 1914, siendo las 4 p. m., dice el

Sr. Presidente. — Continúa la sesión con asistencia de 64 señores diputados en el recinto.

Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

1

DESPACHO DE LAS COMISIONES

—La de Obras Públicas se ha expedido en el proyecto de ley sobre concesión al señor Arturo Castaño para construir y explotar un puerto comercial en la bahía de Samborombón.

—La misma, en el proyecto de ley sobre construcción de un camino carretero desde Cañada Honda a Calingasta.

—La misma, en la minuta del señor diputado Alfredo Demarchi sobre libre navegación del Alto Paraná entre Posadas y Corrientes.

—La de Agricultura, en el proyecto de ley presentado por los señores diputados Lisandro de la Torre y Ovidio Lagos sobre fraccionamiento y venta de tierras por el Poder Ejecutivo.

—La de Negocios Constitucionales, en las solicitudes de venia para demandar a la Nación presentadas por los señores Benjamín B. Martínez y Samuel de Madrid.

—(A la orden del día).

2

PETICIONES PARTICULARES

—La Sociedad de beneficencia de Santo Tomé (Corrientes) solicita aumento de subsidio. (A la comisión de Presupuesto).

—La comisión pro templo parroquial de Pehuajó solicita un subsidio. (A la comisión de Presupuesto).

—Vecinos del interior de la República solicitan el pronto despacho del proyecto de ley del señor diputado R. Lugones Vieyra por el que se hace obligatorio el uso de combustibles nacionales por las empresas ferroviarias y en las usinas de la administración nacional o de empresas privadas. (A sus antecedentes).

—Estudiantes y graduados argentinos en universidades extranjeras hacen observaciones al proyecto de ley reglamentario del ejercicio de las profesiones de ingeniero, arquitecto y agrimensor. (A sus antecedentes).

—Vecinos de San Carlos Centro (Santa Fe) solicitan la sanción de una ley que obligue al Ferrocarril Central Argentino a construir una estación en el ramal que atraviese dicha población. (A la comisión Obras Públicas).

—José S. Carneiro solicita ser incorporado a la lista de guerreros del Paraguay. (A la comisión de Guerra).

—La Sociedad protectora de la educación, de Formosa, solicita aumento de subsidio. (A la comisión de Presupuesto).

—El Hospital Italiano de Santa Fe y colonias solicita un subsidio. (A la comisión de Presupuesto).

—Doña Olegaria Luzuriaga de Barros solicita pensión (A la comisión de Peticiones).

3

TESTACION DE FRASES DE UNA SOLICITUD

—Don Gregorio Soler reitera una solicitud anteriormente presentada al honorable Congreso, sobre aprovechamiento de las caídas de agua de Salto Grande, en el Río Uruguay.

Sr. Secretario Zambrano. — Por no venir en forma esta solicitud, el señor presidente de la honorable Cámara ha dictado sobre ella la siguiente resolución:

"Importando las frases indicadas entre comillas en la precedente solicitud, un desacato a una de las Cámaras del honorable Congreso y a uno de sus miembros, cuya autoridad y opiniones, respectivamente, garanten el sentido del artículo 60 de la Constitución y el 149 del reglamento de la honorable Cámara, téstese las aludidas frases, y una vez hecho, dése entrada a la solicitud de la referencia.

(Firmado) Marco Aurelio Avellaneda. — D. Zambrano (hijo).

Sr. Bravo. — De manera que el orden dado por la secretaría no es el exacto.

Sr. Bas. — Es exactamente el orden que indica el señor diputado: el warrant, la prenda agraria, el ahorro postal. La comisión de Legislación...

Sr. Bravo. — El hecho de que la comisión especial haya obtenido preferencia para sus despachos, no quiere decir que esa preferencia se extienda a asuntos que no le han sido sometidos.

Sr. Palacios. — Permítame, señor diputado. Respecto de algunos proyectos existen despachos que la comisión de Hacienda considera como propios. Son mis dos despachos a que he hecho referencia.

Sr. del Valle. — Creo que sería mejor continuar, para no perder tanto tiempo.

Sr. Bas. — Hago moción para que se pase a la orden del día.

Sr. Presidente. — Se va a pasar a la orden del día.

13

MOCION

Sr. del Barco. — Pido la palabra, para hacer una indicación que es de práctica.

Creo, señor presidente, que corresponde que la honorable Cámara agradezca al señor secretario Sorondo los importantes servicios que ha prestado con dedicación, honorabilidad y competencia durante veinticinco años consecutivos.

Es costumbre establecida en la administración nacional que cuando un funcionario de esta categoría renuncia, se le agradezcan sus servicios. En el presente caso se trata de un funcionario de la Cámara de Diputados, y debe ser ésta, por intermedio de su presidente, la que le manifieste su agradecimiento.

Hago indicación en ese sentido.

—Asentimiento.

Sr. Presidente. — Así lo hará la presidencia.

14

WARRANTS

Sr. Presidente. — Se pasará a la orden del día.

Está en discusión el artículo 17, ahora 16, del despacho de la comisión de Legislación sobre warrants.

Sr. Barrera. — Pido la palabra.

En la sesión anterior propuse un agregado a este artículo, tendiente a que los endosantes del documento tuvieran conocimiento, dentro del menor tiempo posible, de la situación en que estaban colocados, a los fines que indiqué.

Después de la sesión he tenido oportunidad de conversar con algunos miembros de la comisión de Legislación, especialmente con el señor miembro informante, y hemos acordado que se presentaría a la Cámara un temperamento para solucionar las dificultades. Ese temperamento está sintetizado en un artículo que he entregado a la secretaría, modificando el artículo siguiente del despacho, cuyos términos satisfacen los propósitos a que obedece el agregado propuesto.

Por estas razones, voy a retirar la indicación que hice respecto del artículo en discusión, para que las dificultades que hice presentes se salven al considerarse el artículo siguiente, en la forma en que será sometido a la honorable Cámara.

—Después de unos momentos de espera, sin conseguirse número en el recinto, dice el

Sr. Cafferata. — ¿Podríamos saber si hay número en la casa?

Sr. Presidente. — En la casa sí, señor diputado.

—Entran al recinto algunos señores diputados.

Sr. Presidente. — En este momento hay número en el recinto.

La honorable Cámara debe resolver si es su voluntad seguir trabajando o levantar la sesión, porque no es posible que cada vez que se va a votar tenga que esperar la Cámara veinte minutos para obtener número.

Sr. Funes (Lucio). — Hago moción para que la presidencia, conserve el quorum.

Sr. del Valle. — A mi vez, hago indicación para que la presidencia, en previsión de lo que puede ocurrir en las próximas sesiones que quedan, que son pocas, pase una comunicación a todos los señores diputados recomendándoles puntual asistencia.

Sr. Presidente. — Es que concurren, señor diputado; lo malo es que no están presentes en el recinto.

En la sesión de hoy han llegado a votar más de 90 diputados.

Sr. del Valle. — Vienen a hacerse presentes y se van.

Sr. Escobar. — Debería recomendarles a los señores diputados que permanezcan en el recinto todo el tiempo de la sesión.

Sr. Presidente. — Es su deber.

De manera que hay asentimiento por parte de la Cámara para continuar sesionando.

Es preciso que los señores diputados tengan presente esta resolución y continúen en el recinto cumpliendo con su deber.

Sr. Cúneo. — Pido la palabra.

Para proponer un breve cuarto intermedio de diez minutos, por si algún señor diputado necesita hacer alguna cosa indispensable. (*Risas*).

Sr. Presidente. — Ya hemos tenido veinte minutos de descanso.

Se votará el artículo 17, ahora 16.

—Es aprobado.

—En discusión el artículo 18, ahora 17.

Sr. Barrera. — Pido que el señor secretario tenga la deferencia de leer el artículo que he propuesto en reemplazo del de la comisión y que ha sido aceptado por ésta.

Sr. Presidente. — ¿Ha aceptado la comisión?

Sr. Bas. — Sí, señor.

Sr. Presidente. — Se va a leer.

—Se lee:

"El acreedor de un warrant deberá pedir dentro de diez días de la fecha de su vencimiento la venta en público remate de las mercaderías afectadas al mismo. El pedido de venta se hará ante el administrador del depósito, quien, una vez comprobada la autenticidad del warrant, por su conformidad con las constancias del registro, ordenará el remate por intermedio de los mercados de cereales o Bolsas de comercio, donde existan; y donde no los hubiere, por martilleros especiales, designados por orden de nombramiento dentro de una nómina que anualmente formará los tribunales superiores de comercio de la jurisdicción respectiva. Esta resolución será comunicada al deudor y a los endosantes, cuyos domicilios consten en el registro, por carta certificada con recibo de retorno. La comunicación se hará dentro de segundo día, si los interesados estuviesen domiciliados en el lugar del depósito, y por el segundo correo si tuviesen su domicilio en otro punto.

"El remate tendrá lugar en la plaza comercial donde estuviere situado el depósito, y en su defecto en una de las más inmediatas, y se anunciará durante diez días a lo menos, en dos periódicos del lugar donde debe efectuarse el remate o de la plaza comercial más próxima, debiendo especificarse en los avisos los productos materia de la venta, la fecha de la constitución y primera negociación del warrant y el nombre de su dueño primitivo.

"Para los casos en que la venta de las mercaderías deba realizarse por un warrant de que sea tenedor o endosante la misma empresa de depósitos, el Poder Ejecutivo determinará quién debe desempeñar las funciones que este artículo encomienda al administrador del depósito".

Sr. Barrera. — En estos términos se evitan los inconvenientes que apunté, y además se prevé lo necesario para impedir que las empresas sean juez y parte cuando hagan uso de la facultad de emitir warrants que la honorable Cámara les ha acordado.

Sr. Presidente. — Aprobado.

—En discusión el artículo 19, ahora 18.

Sr. Atencio. — Pido la palabra.

¿No cree la comisión que convendría eliminar la palabra "previa", para evitar el caso de que hubiera un mandato judicial que ordenara la suspensión de la venta de las mercaderías depositadas, mandato que no se podría cumplir en el caso de dejarse el artículo como

está, sin que previamente se hubiera hecho la consignación del importe?

Sr. Presidente. — ¿El señor diputado propone la supresión de las últimas palabras?

Sr. Atencio. — Sí, señor presidente; las últimas palabras.

Sr. Bas. — La comisión entiende que el artículo está bien en la forma que ella lo ha redactado, desde el momento que la única forma de garantizar la eficacia del "certificado de depósito" y del "warrant", que es el título crediticio destinado a operar a base de la garantía de esos bienes, es que se tenga la absoluta seguridad de que los bienes depositados garanten, efectivamente, los créditos que se han acordado, teniendo en cuenta la importancia de aquéllos, y, por tanto, que no se puede aceptar otra forma de suspensión de la venta que la consignación de su valor a la orden judicial.

Estas son las razones que ha tenido la comisión para redactar así el artículo y para mantenerlo, porque entiende que esa disposición constituye la esencia de la ley, y que suprimirla significaría hacer desaparecer por completo todas las garantías que requieren esta clase de títulos para merecer la confianza del mercado.

Sr. Atencio. — Y si se presentara un mandato judicial, ¿cuál sería la situación que se crearía?

Sr. Bas. — El juez no puede dar un mandato judicial contra la ley, porque precisamente la ley lo autoriza únicamente "previa consignación del valor".

Sr. Presidente. — ¿No propone nada el señor diputado?

Sr. Atencio. — Nó, señor presidente.

Sr. Barrera. — Pido la palabra.

Yo creo que es muy acertado incluir la quiebra entre las causas que no deben determinar la suspensión de la venta; pero entiendo que no sólo la quiebra sino el concurso civil de acreedores también debe establecerse aquí, y entonces sería mejor poner "concurso de acreedores", en vez de "quiebra".

Sr. Bas. — Pero el artículo dice: "ni por otra causa". Como en sus términos generales esa cláusula comprende todas, me parece suficiente.

Sr. Barrera. — Pero en lugar de hablar de quiebras, sería preferible decir, en general, "concurso de acreedores".

Sr. Bas. — Sin duda, señor diputado. Pero con estas reformas perdemos tiempo, sin modificar la ley, en realidad.

Sr. Barrera. — O hubiera podido decirse: por ninguna causa. ¿Para qué enumerar sólo algunas, si no se admite ninguna fuera de la orden judicial expedida a virtud del pago?

Sr. Bas. — Indudablemente, hubiera sido mejor; pero la ley no se perjudica en nada con el artículo tal como está.

Sr. Barrera. — Mi propósito era simplemente colaborar en la mejor redacción de la ley.

Sr. Presidente. — ¿No insiste el señor diputado?

Sr. Barrera. — Nó, señor; no vale la pena.

Sr. Presidente. — Aprobado el artículo 18.

—En discusión el artículo 20, ahora 19.

Sr. Barrera. — Pido la palabra.

Creo que no sería necesario acudir, desde luego, al juez de comercio y obligar a los interesados a entrar en las complicadas tramitaciones judiciales. Me parece que bastaría, si hay conformidad de partes, dentro de cierto término, con que la distribución se realizara sin más trámite, por quien efectuó la venta; y solo en caso de oposición depositar el valor a disposición del juez, para no someter a todos los interesados a estas tramitaciones engorrosas y también costosas.

Estando los presentes de conformidad, no hay objeto...

Sr. Bas. — Nó, señor diputado; no hay conformidad.

La comisión mantiene su despacho, y entiende que una vez que el admi-

nistrador del depósito ha hecho la distribución de los valores del producido de la venta, dentro del orden de los privilegios que surgen de la misma ley, el saldo o excedente debe ser depositado en las condiciones que ella establece, porque han cesado desde ese momento las funciones que corresponden al administrador del depósito.

Sr. Barrera. — No nos hemos entendido.

Sr. Presidente. — ¿El señor diputado propone la supresión de las palabras "a la orden del juez de comercio correspondiente"?

Sr. Barrera. — No, señor: que en último término, si no hay conformidad de partes dentro de tercero día para la distribución, entonces se consigne el producido del remate a la orden del juez.

Sr. Presidente. — Permítame el señor diputado.

Para regularizar la discusión es conveniente que el señor diputado dicte antes que nada la modificación que propone, a fin de que pueda ser comprendida por la comisión.

Sr. Barrera. — Lo voy a hacer, señor presidente. Estaba diciendo cuál era mi pensamiento y en seguida iba a concretarlo...

Sr. Presidente. — Es más conveniente dictar primero la modificación, y en seguida fundarla, para la mejor comprensión de los señores diputados y de la secretaría.

Sr. Barrera. — Propongo que quede así: "El producido del remate será distribuido por quien efectúe la venta, siempre que los interesados manifiesten su conformidad dentro de tercero día, y en caso contrario lo depositará a la orden del juez de comercio correspondiente". Lo demás, como está.

Sr. Mihura. — Me parece que la comisión no puede oponerse a esta modificación.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — ¿Ha terminado el señor diputado Barrera?

Sr. Barrera. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente. — ¿Deseaba hacer uso de la palabra el señor diputado Mihura?

Sr. Mihura. — Quería decir, señor presidente, que la comisión no puede oponerse a la modificación que propone el señor diputado por San Juan, porque en la práctica va a facilitar enormemente la tramitación de estas liquidaciones. Generalmente, estos asuntos cuando van a los jueces se demoran, y siendo el martillero el encargado de hacerla, arreglará con los interesados y se abreviarán términos.

Sr. Bas. — ¿El administrador del depósito, o el martillero? ¿A cuál de los dos se encargaría? No he oído bien.

Sr. Presidente. — Me parece que el señor diputado por San Juan propone el martillero.

Sr. Barrera. — He entendido que es lo que establece la comisión en su despacho: ¿Quién efectúa la venta? El martillero.

Sr. Bas. — Pero aquí se establece el depósito a la orden del juez de comercio. Yo pregunto a quien se atribuye en la proposición la distribución de los valores, si al administrador del depósito o al martillero.

Sr. Barrera. — Al martillero, al Mercado de cereales o a la Bolsa de comercio, que son quienes efectúan la venta, según los términos empleados en el proyecto.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Melo. — La había pedido, señor, precisamente para formular la misma pregunta que acaba de hacer el señor miembro informante y a la vez, para dirigirle otra, que es la siguiente: ¿Considera la comisión a estos almacenes encargados de los depósitos como empresas comerciales, o no los considera así?

Y hago esta pregunta porque este asunto ha sido resuelto con distinto criterio en legislaciones extranjeras y tiene su importancia; porque si se les con-

sidera como empresas comerciales, estarán obligados a llevar libros de comercio en forma y entonces habría así un antecedente y una garantía, y podría llegarse a un procedimiento más breve y sumario para la distribución del producido de las mercaderías warrantadas.

De manera que desearía que el señor miembro informante nos aclarara este punto.

Sr. Bas. — Pido la palabra.

La comisión entiende que se trata de empresas comerciales y que deben llevar libros generales, y aparte de ellos, los libros especiales que se establecen en la ley, a los efectos de registrar en cada caso todas las operaciones en que intervengan.

Dejo así contestada la pregunta del señor diputado, y entiendo que es ésta una razón más para demostrar que, en caso de sacársele al juez esta facultad de distribuir los valores, lo más práctico sería que se atribuyera al administrador del mismo depósito, a quien se dan funciones especiales por la ley, y que ofrece, como decía muy bien el señor diputado por la capital, todas las garantías deseables, porque sus libros, que estarán rubricados, van a servir como documentos públicos, para constatar esas operaciones.

De manera que yo creo que podría salvarse la dificultad, aceptando la proposición formulada por el señor diputado por San Juan, pero substituyendo al martillero por el administrador del depósito.

Sr. Barrera. — Acepto, porque mi propósito es abreviar la tramitación y evitar que necesariamente vayan los interesados ante la justicia.

Sr. Presidente. — Sírvese el señor secretario leer el artículo en la forma en que queda.

—Se lee:

"El producido del remate será distribuido por el administrador del depósito respectivo, siempre que los interesados manifiesten su conformidad dentro de tercero día. En caso contrario, lo depositará a la orden del juez correspondiente".

Sr. Bas. — Yo pediría al señor diputado, para que pueda votarse con ma-

yor facilidad, que suprima la parte referente a la conformidad de los interesados. Desde el momento que quien va a hacer la distribución es el administrador del depósito, no hay para qué requerir la conformidad de los interesados, puesto que el administrador tiene que hacer esa distribución ajustándose a la ley; y en caso de que medie oposición, depositará el producido a la orden del juez. ¿Para qué vamos a complicar el trámite con esta conformidad previa de los interesados?

Sr. Barrera. — Por esta razón: porque puede haber alguna cuestión respecto del prorrato, y afirmar cualquier interesado que a él le corresponde más.

Sr. Bas. — Pero no podemos provocar pleitos estableciendo la conformidad o disconformidad.

Sr. Barrera. — ¿Y si hay cuestión de prorrato?

Sr. Bas. — Entonces, para aclarar los conceptos, yo acepto, a nombre de la comisión, la proposición hecha por el señor diputado por San Juan, pero substituyendo al martillero por el administrador del depósito, y suprimiendo de la redacción de aquella, las palabras "siempre que los interesados manifiesten su conformidad dentro de tercero día".

Sr. Barrera. — Yo considero esa conformidad necesaria, porque puede haber divergencia entre los interesados respecto del prorrato de la suma; y si ese caso se produce, tiene que ser resuelto por la justicia, no por el administrador del depósito.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Voy a hacer una indicación que conciliará, tal vez, lo que propone el señor diputado Barrera con el pensamiento de la comisión.

Es la de substituir las palabras "siempre que mediare conformidad", por "siempre que no mediare oposición". Porque creo que, en principio, no debe subordinarse a trámites largos y difíciles la distribución de los fondos. Si alguien tiene interés en oponerse a la distribución podrá hacerlo, notificándolo al administrador del depósito.

Sr. Barrera. — No hay inconveniente. Es el mismo pensamiento. Y si se produce oposición, intervendrá el juez.

Sr. Melo. — Basta que se notifique al administrador para que éste no haga la distribución.

Sr. Bas. — Estoy conforme con la proposición del señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Presidente. — Sírvasse el señor secretario leer el artículo en la forma aceptada por la comisión.

—Se lee:

"El producido del remate será distribuido por el administrador del depósito respectivo, siempre que no mediare oposición dentro de tercero día.

"En caso contrario, lo depositará a la orden del juez correspondiente para su distribución dentro del orden de preferencias consignadas en el artículo 23. El sobrante, si lo hubiere, quedará a disposición del dueño del certificado de depósito respectivo".

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo en la forma leída.

—Resulta afirmativa.

—En discusión el artículo 21, ahora 20.

Sr. Padilla. — Pido la palabra.

Para pedir una pequeña explicación a la comisión y evitar con ello, posiblemente, una moción de reconsideración que tendría que hacer.

El artículo 18 del proyecto — ahora 17 por la supresión del número 7 que ha hecho la Cámara — ha sido sancionado en forma de una rapidez vertiginosa y con un concepto completamente contrario al que tiene el despacho de la comisión.

Bien; este artículo ha sido aceptado por la comisión, siendo eso precisamente lo que me llama la atención y lo que me induce a pedir la aclaración, puesto que el concepto, tal cual ha sido sancionado, es contrario al de las leyes de procedimiento, no es más el procedimiento en caso de ejecución.

El artículo, tal cual fué redactado y despachado por la comisión, decía esto: "El acreedor de un warrant podrá exigir, 10 días después de la fecha de su vencimiento, la venta en público rema-

te de las mercaderías afectadas al mismo." Es decir; que como acreedor, según lo establecen todas las leyes de procedimiento, le queda ese derecho de poder pedir esa venta, pero no se lo impone la ley.

Yo creo que la forma que se establece por el artículo sancionado, podría dar lugar a perjuicios. No veo por qué se ha de imponer a un acreedor que haga uso de su derecho dentro de los diez días, cuando puede ser más conveniente para el mismo deudor, para el mismo acreedor, hacerlo en una oportunidad que no perjudique a nadie y que beneficie a todos. Dentro de este procedimiento, no hay sin duda una sanción penal; pero es imperativo, puesto que si no lo hace en ese término quiere decir que pierde el derecho. Y yo pregunto: si el acreedor no hiciera uso de este derecho que imperativamente le ordena usar la ley dentro de diez días, ¿cuál es la situación en que quedaría?

Sr. Bas. — ¿Si me permite?... Ya comprendo la observación del señor diputado...

Sr. Padilla. — No me ha dejado acabar.

Sr. Bas. — Pero acabará después, o puede empezar de nuevo.

Sr. Padilla. — Es que lo difícil es volver a empezar, sin haber acabado.

Sr. Bas. — Desde luego, el artículo propuesto por la comisión y el aceptado por la Cámara no difieren fundamentalmente; son casi exactamente lo mismo, con algunas aclaraciones.

La disposición imperativa a que se refiere el señor diputado, tiene por objeto salvaguardar la situación de los diferentes endosantes, en virtud de haberse suprimido la exigencia del protesto y substituido en cambio la obligación, para conservar los derechos contra los endosantes, de la venta rápida con las formalidades establecidas. Ese es el único motivo de esta disposición, y el único caso en que el acreedor que no ejecutara o que no solicitara la venta dentro del plazo de diez días se perjudicaría perdiendo su acción los diferentes endosantes.

Sr. Padilla. — No es eso lo que dice el artículo.

Sr. Barrera. — Un artículo posterior lo dice.

Sr. Bas. — Es para los casos en que el warrant haya sido endosado; que el acreedor no pase indefinidamente un mes, dos meses, un año, dos años, sin hacer efectiva la venta de los artículos; porque como los endosantes no han sido notificados de la falta de pago, por haberse suprimido el protesto, podrían resultar perjudicados con la demora en la venta de los efectos depositados.

Entonces se le dice al acreedor, cuando ha habido endosos del warrant: si usted no procede a la venta de los artículos en los diez días, en el término que establece la ley, pierde toda acción contra su endosante, manteniéndola siempre, sin embargo, contra su deudor principal.

Sr. Padilla. — Pero eso es precisamente lo que no dice. Quiere decir que la comisión ha contemplado el caso de que haya varios endosantes, para que haya necesidad del protesto; pero cuando eso no ocurre, ¿qué responsabilidad se establece?

Sr. Bas. — Para el caso de que hayan endosantes, la responsabilidad está en la ley, porque se priva al acreedor toda su acción contra aquéllos en los términos que ella establece.

Sr. Padilla. — ¿Y las responsabilidades?

Sr. Bas. — La ley no establece en general ninguna responsabilidad; lo que le está demostrando que el objeto de la disposición se consigna con relación a los endosantes, a quienes únicamente se refiere.

Si hubiera quedado antes alguna duda, con esto estará todo aclarado.

Sr. Padilla. — ¿Y cuándo no hay endosantes?

Sr. Bas. — No tiene el acreedor responsabilidad de ningún género por no solicitar la venta en el plazo indicado.

Sr. Padilla. — Pero es necesario decirlo. Esta aclaración me demuestra que he hecho bien en llamar la atención de la Cámara sobre este punto.

Sr. Bas. — Es indudable que el señor diputado lo ha creído así, cuando lo ha hecho.

Sr. Padilla. — Antes, he tenido duda; ahora afirmo.

Sr. Presidente. — ¿Formula una moción de reconsideración el señor diputado?

Sr. Padilla. — Pudiera ser que no fuera necesario.

La explicación del señor miembro informante de la comisión de Legislación consiste en esto: esta primera parte observada, cuando hay una disposición imperativa, cuando se usa del derecho de sacar a remate dentro del término de diez días, se aplica en los casos en que hay endosantes, y con relación a ellos; quiere decir que cuando no hay endosantes, no se aplica la disposición. Y entonces ¿cuál es la disposición que se aplica en los casos en que no hay endosantes?

Sr. Bas. — Es facultativa.

Sr. Padilla. — No puede ser facultativa, si el texto es imperativo.

Entonces, debería, por lo menos, especificarse que en los casos en que haya endosantes corresponderá la disposición imperativa; y en los casos en que no los haya, será facultativa.

Sr. Presidente. — Permítanme los señores diputados; la discusión se está haciendo en una forma irregular.

Sr. Padilla. — Y la culpa de ello la tiene la comisión, que hace un instante aceptó un agregado con un concepto, y en seguida otro con un concepto completamente contrario.

Sr. Bas. — Está absolutamente equivocado. La comisión está dentro de su propio concepto.

Sr. Barrera. — Yo quisiera saber si el señor diputado hace moción de reconsideración, para entonces poder explicar cómo...

Sr. Padilla. — Formulo moción de reconsideración respecto del artículo que se acaba de aprobar.

Sr. Presidente. — Está en discusión la moción de reconsideración presentada por el señor diputado por Tucumán, referente del artículo 18, ahora 17, sancionado recientemente por la Cámara.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Sr. Barrera. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — La había pedido antes el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Melo. — Voy a apoyar la moción de reconsideración presentada por el señor diputado por Tucumán, y lo hago porque creo que no hay ningún inconveniente en hacer la aclaración que reclama.

Me determinan a ello, además de las razones que él ha expresado, precedentes judiciales establecidos con motivo de un texto que existe en el Código de Comercio, el artículo 585, relativo a la prenda.

Cuando se reformó la legislación comercial, en el año 89, se facultó al acreedor prendario a vender la prenda dentro de los diez días del vencimiento de la obligación; la ley estableció ese plazo de diez días; pero en muchas oportunidades, acreedores tolerantes no hicieron uso del derecho de venderla, y esto dió lugar a que ciertos deudores, en lugar de agradecer esta consideración del acreedor, le hicieran todavía pleito por daños y perjuicios, fundados en que en el momento en que el acreedor debió proceder, los títulos dados en prenda tenían un valor determinado, valor que después decayó por la depreciación de los títulos.

Ante tales precedentes es útil incorporar una aclaración que evite tales riesgos en el caso de no haber endosantes; para que si el tenedor del warrant no procede a la venta dentro de los diez días, no recoja como resultado de esta consideración que se le inicie acción de daños y perjuicios por disminución del precio de los productos depositados.

La aclaración se refiere al caso de no haber endosantes, porque las consideraciones que ha hecho el señor diputado Bas son muy exactas. El warrant es un instrumento destinado a vivir, según las legislaciones extranjeras, a lo sumo seis meses.

Sr. Bas. — Aquí también.

Sr. Melo. — La acción contra los endosantes es una acción también de una duración breve, entre diez y treinta días; de modo que en razón de esto se justifica que se establezca un plazo pe-

rentorio para la venta cuando hay endosantes, a fin de poder saber si el producido deja un déficit y reclamarlo; mientras que cuando faltan los endosantes queda justificado lo que dice el señor diputado por Tucumán, de que no hay razón para apremiar al tenedor del warrant a que lo ejecute.

Por esto estoy de acuerdo con la moción de reconsideración a fin de que se lleve al texto del artículo la aclaración que se propone.

Sr. Bas. — Pido la palabra.

Para apoyar la moción de reconsideración, siempre que ella sea en el concepto de aclarar la disposición, y siempre que esté dentro del espíritu de la ley.

Sr. Barrera. — Yo siento la necesidad, como autor de la sustitución del verbo "poder" por "deber" de explicar el alcance...

Sr. Presidente. — Precisamente votando la moción de reconsideración podrá explicarlo con toda amplitud, cosa que no podría hacer ahora.

Sr. Barrera. — Justamente iba a dar un antecedente a la honorable Cámara para que le sirviera a fin de determinar su voto en la moción de reconsideración. Y creo que no es impertinente, desde el momento que los señores diputados han fundado sus opiniones respecto del fundamento mismo de la reforma.

Sr. Presidente. — Pero tendría que hacerlo muy brevemente, porque se trata de una moción de orden.

Y como el espíritu de la Cámara parece que es acceder a la indicación que se ha formulado...

Sr. Barrera. — Muy bien.

Sr. Presidente. — Se va a votar si se reconsidera el artículo 17.

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.

Sr. Barrera. — He cambiado — y esto con asentimiento de la comisión — el verbo empleado en el primitivo artículo — "deberá" en lugar de "podrá" — por las razones que ha expre-

sado el señor diputado Bas y que me parecen por sí solas concluyentes.

Hay que cuidar los intereses legítimos de los endosantes.

No se puede, desde luego, hacer distinciones, me parece, entre cuando haya endoso y no lo haya, porque tratándose de endosos en blanco, que no se registran, no hay constancia de ellos en los libros. De manera que no conviene hacer el distinguo.

Por otra parte, hay que notar que mi indicación no consulta solamente el beneficio de los endosantes, sino que también ampara los derechos del propietario de la mercadería. El propietario puede ser un tercero a quien se la transfiera el primitivo dueño de ella, y no puede estar indefinidamente subordinado, para cobrar el saldo que pudiera resultar a su favor, a la voluntad del acreedor del warrant.

Son, pues, los intereses del endosante y los intereses del propietario de la mercadería los que contempla este artículo al exigir que dentro del término perentorio se deduzca la acción correspondiente para hacer efectivo el pago a los acreedores.

Es necesario tener bien presente estas consideraciones, que no las ha recordado el señor miembro informante.

Sr. Bas. — ¿Qué consideraciones?

Sr. Barrera. — Que están de por medio, repito, los intereses del propietario de los efectos también. Ese propietario puede ser un tercero adquirente de los mismos, por endoso del certificado de depósito. Y no es posible que esté pendiente de la voluntad del acreedor del warrant para cobrar el saldo que pueda resultar de las mercaderías, una vez que ese acreedor del warrant hiciera efectivo su crédito, lo que podría hacer después de mucho tiempo, si no se le fija un término.

Sr. Bas. — El endosatario del certificado se convierte en propietario de los productos materia de la garantía; por consiguiente, no existe la razón enunciada, y está en las mismas condiciones del depositante primitivo.

Sr. Barrera. — No he oído, discúlpame, señor diputado.

Sr. Bas. — Decía que la persona que

adquiere, por medio de un endoso del certificado la propiedad de los artículos que han sido entregados al depósito...

Sr. Barrera. — Sí, señor.

Sr. Bas. — ...adquiere definitivamente esa propiedad.

Sr. Barrera. — Es claro.

Sr. Bas. — Y por consiguiente, puede hacerla vender cuando quiera, porque puede consignar el precio, de acuerdo con la disposición de esta ley, en todo momento.

Sr. Barrera. — Es indudable.

Sr. Bas. — La proposición hecha por el señor diputado Padilla aclara perfectamente el concepto de la comisión, porque, como lo he dicho en el informe general y diez veces lo he repetido en los debates particulares, el único propósito de la exigencia de la venta dentro del término de diez días, es substituir el protesto—que suprimámos,—para que los endosantes que no tienen conocimiento de la falta de pago no fueran perjudicados por la demora ilimitada de la venta de los productos. Pero cuando no hay endosante...

Sr. Barrera. — ¿Y cómo se va a saber?...

Sr. Bas. — ...¿por qué hemos de obligar al acreedor a que en diez días venda los productos, si con su demora a nadie perjudica?

Por consiguiente, la aclaración propuesta por el señor diputado por Tucumán está absolutamente dentro del concepto de la ley y de los propósitos de la comisión.

Sr. Funes (Lucio). — Este punto está perfectamente aclarado, y pido que se ponga a votación.

Sr. Barrera. — No se olvide que el propietario de los efectos, sea el primitivo o un tercero adquirente, está interesado en cobrar pronto el saldo que resulte de la venta. Es claro que puede no hallarse en condiciones de cancelar el crédito, arbitrio que indicaba el señor diputado Bas, y limitarse simplemente a cobrar el saldo que resulte.

Sr. Padilla. — Yo propongo sólo después de la primera parte, el agregado que si lee el artículo el señor secretario, voy a indicar.

—Se lee:

"El acreedor de un warrant deberá pedir dentro de diez días de la fecha de su vencimiento, la venta en público emate de las mercaderías afectadas al mismo".

Sr. Padilla. — Punto y seguido: "Cuando no hubiera endoso, podrá usar de este derecho dentro del mismo término".

Sr. Presidente. — Se va a dar nuevamente lectura del artículo, con la modificación propuesta.

—Se lee:

"El acreedor de un warrant podrá pedir, dentro de diez días de la fecha de su vencimiento, la venta en público remate de la mercadería afectada al mismo. Cuando no hubiera endoso, podrá usar de este derecho dentro del mismo término".

Sr. Presidente. — ¿Acepta la comisión el agregado propuesto?

Sr. Bas. — Sí, señor.

—Se aprueba el artículo con la modificación propuesta.

—Se dan por aprobados los artículos 21 y 22, ahora 20 y 21.

—En discusión el artículo 23, ahora 22.

Sr. Barrera. — Pido la palabra.

Me parece prudente agregar, donde habla de los créditos preferidos, el impuesto del cuarto por mil establecido por el artículo 26.

Sr. Presidente. — ¿Dónde vendría el agregado, señor diputado?

Sr. Barrera. — Al final del párrafo primero, donde dice: "respecto a cualquier otro crédito que no sean los derechos del depósito especial", etc., agregar "el impuesto establecido por el artículo 26", que también es preferido.

Sr. Presidente. — ¿Acepta la comisión el agregado?

Sr. Bas. — Sí, señor presidente.

—Se da por aprobado el artículo con el agregado propuesto.

—En discusión el artículo 24, ahora 23.

Sr. Barrera. — Visiblemente, falta una o: debe decir "de un certificado de depósito o de un warrant".

Sr. Bas. — Efectivamente, hay un error, o mejor dicho una omisión de imprenta.

Sr. Presidente. — Queda aprobado con la corrección indicada.

—Sin observación, se aprueba el artículo 25, ahora 24.

—En discusión el artículo 26, ahora 25.

Sr. Atencio. — Pido la palabra.

Desearía saber qué razones ha tenido la comisión para confiar a la empresa la función fiscal de percibir el impuesto.

Sr. Bas. — Pido la palabra.

Entre otras, la de economizar gastos. Desde el momento que la empresa va a llevar libros especiales de registro, que hacen plena fe sobre todas las operaciones que realice, y con respecto a las cuales debe cobrarse el impuesto, hay una buena garantía de control respecto a la percepción; y me parece que si estableciéramos en la ley que en cada depósito debe haber un receptor de rentas del Estado, se produciría un gasto mayor sin ningún beneficio.

Por lo demás, damos al administrador del depósito la facultad de expedir un documento que constituye en realidad un instrumento público, de llevar registros que van a hacer plena fe, de intervenir en las ventas; y todo esto no puede significar una función que exija mayores garantías que las que se necesitan para otros actos más serios, como los recordados, sobre todo tratándose de la percepción de un pequeño impuesto que está perfectamente controlado por las propias operaciones que deben realizarse.

Estas son las razones que ha tenido la comisión.

Sr. Atencio. — Pido la palabra.

Yo no me he referido a que pudiera haber falta de garantía de parte de la empresa, sino a que en principio parece difícil que una empresa particular pueda percibir un impuesto fiscal.

En caso de que hubiera una razón distinta para justificar esa facultad, tal vez convendría establecer ciertas reglas que podrían ser, por ejemplo, que la empresa, al cobrar el impuesto, diera recibo en una estampilla del Estado. La empresa recibiría del fisco una cantidad de estampillas de la cual debería rendir cuenta diaria, semanal o mensual.

En la forma establecida por la comisión, la empresa rendiría cuenta al Estado cuando lo estimara conveniente.

La comisión, desde luego, ha tenido una duda en este asunto, porque hay una diferencia entre el impuesto aconsejado entre este proyecto final y el impuesto aconsejado primero.

Sr. Arce. — Por error.

Sr. Bas. — Estaba equivocado; era el mismo: $1/4$ por mil.

Sr. Barrera. — Y estaba en letras y no en números.

Sr. Bas. — Puede leer el despacho original y verá que es $1/4$.

Sr. Atencio. — No lo pongo en duda.

Desearía que la comisión contestara si estima conveniente introducir una seguridad de esa naturaleza.

Sr. Arce. — Pido la palabra.

Quiero hacer notar, señor presidente, que esto estaba más expresamente dicho en el primitivo despacho de la comisión de Legislación, modificado después por la comisión especial de Hacienda.

Por el despacho anterior se obligaba al Poder Ejecutivo a crear una inspección especial de estas empresas: y como, por otra parte, la ley dice que las empresas cobrarán, pero no dice cómo, todo esto se simplificó a objeto de que el Poder Ejecutivo, de acuerdo con las prácticas generales en materia de impuestos, fijase la reglamentación que estimara conveniente; y si, por ejemplo, el estampillado a que se ha

referido el señor diputado, que parece haber dado tan buen resultado, no obstante los inconvenientes que se hicieron notar oportunamente con respecto al estampillado de las bebidas alcohólicas, se pudiese adoptar en este caso, probablemente el Poder Ejecutivo haría cobrar el impuesto en esa forma.

Por eso me parece innecesario consignar aquí la forma en que se ha de percibir. Por otra parte, existirá una inspección permanente del Poder Ejecutivo sobre todas estas empresas.

Sr. Bas. — Establecido el concepto del impuesto, la pregunta del señor diputado no se refería a la forma en que este se habría de cobrar, sino a la institución llamada a percibirlo; y por eso le contesté en los términos que ha oído la Cámara.

Sr. Atencio. — Me refería a las dos cosas.

Sr. Bas. — En cuanto a la forma del impuesto, la comisión entiende, como ha dicho el señor diputado Arce, que al establecerse el cuarto por mil, sólo se determina el cuántum del impuesto, quedando al criterio del Poder Ejecutivo determinar la forma de percepción que juzgue más práctica.

Es muy posible que adopte la forma que indica el señor diputado.

Sr. Atencio. — Muy bien.

Sr. Bas. — Por lo demás, quiero recordarle, refiriéndome a su afirmación de que no hay antecedentes de que empresas particulares perciban impuestos correspondientes al Estado, que ello es absolutamente inexacto. Tiene el señor diputado el caso de los ferrocarriles y otra cantidad de empresas.

Por consiguiente, la comisión mantiene su despacho en todas sus partes, y entiende que no está en oposición con el pensamiento del señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Atencio. — Estoy conforme con la explicación que ha dado la comisión, porque entonces el Poder Ejecutivo, al establecer la reglamentación oportuna, eliminará estas dificultades.

Pero yo hubiese deseado que la comisión le dejase mayor margen al Po-

der Ejecutivo para reglamentar otros puntos, a fin de que esta ley no resultara excesivamente detallada.

Sr. Barrera. — Estoy conforme con que se autorice a la empresa para percibir el impuesto, puesto que el Poder Ejecutivo reglamentará la forma más eficaz de percepción; pero me parece notar, respecto de otro punto de vista, alguna incongruencia o algo que puede ser una injusticia.

Dice el artículo que este impuesto será percibido *previamente* a la entrega de los efectos, junto con los gastos y derechos por el depósito.

¿Siempre la percepción es previa a la entrega de los efectos? ¿Y cuando esos efectos han sido vendidos en remate público y el comprador ha abonado el precio? ¿Va a quedar pendiente la entrega al comprador por la percepción de derechos, cuyo cobro pudiera demorar?

Me parece que nó, y en tal caso debería establecerse que en caso de venta la oportunidad de cobrar será la señalada por un artículo anterior, es decir, cuando se distribuya el producido del remate, depositado por el comprador. El fisco queda garantido y salvado el derecho del comprador que ha pagado el precio.

Sr. Bas. — Lo que se quiere establecer es que en ningún caso podrán retirarse las mercaderías sin haberse abonado el impuesto.

Sr. Barrera. — Pero yo me pongo en el caso de un comprador de los efectos rematados. ¿Se va a demorar la entrega de los efectos hasta que se haya distribuido el producido y se cobre el impuesto, no obstante haber pagado su valor?

Creo que sería injusto, máxime cuando hemos previsto la posibilidad de que sea el juzgado de comercio quien, por inconvenientes suscitados, tenga que resolver, y, por lo tanto, demorar-se la tramitación.

¿Por qué se va a privar, entretanto, al comprador de la posesión de los efectos, si ha pagado su precio y cumplido con sus obligaciones?

Propongo, pues, este agregado: "o en la oportunidad a que se refiere el artículo tal".

Sr. Bas. — Pido que se vote el despacho de la comisión tal como está, porque no es posible admitir la entrega de las mercaderías sin pagar previamente el impuesto.

Sr. Barrera. — ¡Quién va a comprar en estas condiciones! Es dificultar la venta en remate, si el comprador ha de correr el peligro de verse privado durante un término de las mercaderías compradas y pagadas.

Sr. Presidente. — Se votará el despacho de la comisión.

Sr. Barrera. — Mi proposición no altera ese despacho; es un agregado, previendo un caso determinado.

Sr. Presidente. — Si fuera rechazado el despacho de la comisión, se votará con el agregado propuesto por el señor diputado por San Juan.

—Se vota, y es aprobado.

Sr. Barrera. — Pido que se vote el agregado.

Sr. Presidente. — Pero es lo mismo, señor diputado; la presidencia ha planteado claramente la votación.

Sr. Barrera. — Yo he votado por la afirmativa, en la inteligencia de que se votaría después el agregado.

Sr. Presidente. — Bien, señor diputado; se va a votar el agregado.

Sr. Secretario Zambrano. — Tenga la bondad de redactarlo, señor diputado.

Sr. Barrera. — "O en la oportunidad establecida por el artículo 19, si se hubieran vendido los efectos".

—Se vota el agregado propuesto, y resulta negativa de 22 votos.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo en la forma redactada por la comisión.

—Se da por aprobado el artículo 27, ahora 26.

—En discusión el 28, ahora 27.

Sr. Barrera. — Pido la palabra. Propongo, como agregado también,

no obstante las resistencias casi sistemáticas de la comisión, lo siguiente: "en caso de no haberse estipulado el lugar del pago", pues este convenio debe prevalecer para determinar la jurisdicción.

Sr. Bas. — La comisión acepta.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo con el agregado propuesto por el señor diputado por San Juan, y aceptado por la comisión.

—Se da por aprobado el artículo 29, ahora 28.

—En discusión el 30, ahora 29.

Sr. Atencio. — Pido la palabra.

Sr. Justo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — La había pedido antes el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Atencio. — Comprendo perfectamente cuál es el espíritu, la intención de la comisión al establecer este nuevo artículo, que no estaba en el proyecto primitivo...

Sr. Bas. — Voy a explicarle; el objeto es muy claro...

Sr. Atencio. — Nó, señor; he dicho, precisamente, que comprendo cuál ha sido el propósito que ha animado a la comisión al establecerlo.

Pero no me parece que tratándose de empresas que van a tener seguramente, cuando esta ley tenga éxito, considerables utilidades, se justifique esta exención de impuestos.

Las empresas, desde luego, van a constituir, casi con seguridad, un monopolio, porque donde ellas se establezcan no van a poder radicarse otras. Es posible que ya existan o que ya estén preparadas para operar en ese sentido empresas que tengan depósitos destinados a otros fines.

¿Qué razón justificaría, entonces, esta exención de impuestos a empresas o compañías que tendrán, seguramente, tantas utilidades, cuando el impuesto de patentes, que es el de que se las exceptúa, es un impuesto que recae ordinariamente sobre todo género de comercios y de industrias, sin excluir

aquellos ramos que están destinados a la venta de artículos de primera necesidad?

Sr. Bas. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — La había pedido antes el señor diputado por la Capital.

Sr. Justo. — Prefiero oír primero al señor miembro informante de la comisión.

Sr. Bas. — Si el señor diputado quiere hacer uso de la palabra, no tengo ningún inconveniente en cedérsela.

Sr. Justo. — Nó, señor.

Sr. Bas. — La disposición del artículo 30, a que ha hecho referencia el señor diputado por Buenos Aires, desde luego, no forma parte del engranaje mismo de la ley, y no la alteraría en su substancia, cualquiera que fuese el criterio de la Cámara a este respecto, manteniéndola o rechazándola.

Ella se propone favorecer el establecimiento de esta clase de depósitos en un plazo breve; de ahí que el artículo referido exonera del impuesto de patente a los depósitos autorizados a emitir warrants, que se establezcan dentro de los dos años de promulgada esta ley.

Fácilmente se ve por los términos de la disposición, que trata de una exoneración de impuestos, con fines de fomento para que se establezcan galpones, que yo mismo le he oído decir al señor diputado no existen, y que no había objeto en dictar una ley de warrants, cuando no había depósitos.

Entonces, si esta ley de warrants podría dejar de tener aplicación por falta de depósitos, me parece que es de buena política tratar, dentro de la ley y por los medios de que puede disponer el fisco, entre otros la exoneración de impuestos, de beneficiar a las empresas estimulando la construcción de depósitos.

Por otra parte, esta exoneración no se establece con un criterio general y absoluto, para siempre, sino por plazo breve, precisamente por los propósitos que la informan.

Tales son, señor presidente, las razones que ha tenido la comisión para formular este artículo, porque francamen-

te, lo cree aceptable; y me parece recordar que en mi espíritu influyó como motivo determinante para aceptarlo, la misma consideración que hace el señor diputado, esto es, su temor del fracaso de esta ley por la falta de depósitos.

Sr. Atencio. — Pido la palabra.

Es inútil que el señor diputado miembro informante de la comisión intente encontrarme en contradicción. Yo he sostenido y sostengo que el warrant, en lo que se refiere a la agricultura, va a fracasar, entre otras causas porque no existen depósitos; pero el warrant para otros fines tendrá y seguramente tiene ya depósitos, como también tuve ocasión de decirlo.

Sr. Bas. — La ley se dicta para todos. Como miembro de la comisión, yo no puedo aceptar que el señor diputado diga que el warrant se establece para otros fines; se establece para todos y sólo los fines que determina la ley.

Por consiguiente, la comisión al formular su despacho lo hace dentro del concepto honrado que la ha guiado, y no para favorecer intereses particulares.

Sr. Atencio. — No ha sido feliz en su interrupción el señor diputado. He dicho que para la agricultura no tendrá éxito el warrant, pero para los otros fines sí. Los otros fines, ¿cuáles? Los que están establecidos por la ley.

¿Por qué me quiere hacer aparecer el señor diputado también como sosteniendo esa suposición, es decir, como que yo entiendo suponer que la comisión tiene otros fines? Los otros fines están en la ley, señor presidente.

Pero con esos argumentos no se desvirtúa el fondo de mi observación. ¿Está el país en circunstancias de establecer beneficios extraordinarios en favor de empresas que desde luego van a tener grandes utilidades si llegan a establecerse?

Insisto, señor presidente, en que no es justo que se establezca esa excepción, en que se debe eliminar el artículo para que el caso se rija por la ley ordinaria, por la ley nacional de patentes.

Sr. Mihura. — Pido la palabra.

Simplemente para decir que ya hay una ley votada por el Congreso Nacional por la cual se exonera de impuestos a los elevadores de granos que se instalen en el país, y a esa ley se han acogido todos los elevadores que se han establecido.

Esto concuerda precisamente con el artículo que se observa.

Sr. Presidente. — ¿El señor diputado por la Capital desea hacer uso de la palabra?

Sr. Justo. — Deseo que se vote, señor presidente.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo del despacho de la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se aprueba el artículo 31, ahora 30.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — ¿Sobre el artículo aprobado?

Sr. Melo. — Nó, señor presidente. Antes de pasar a las disposiciones penales, iba a proponer un artículo nuevo.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor diputado.

Sr. Melo. — Es el siguiente:

“Las personas o sociedades autorizadas para establecer almacenes que emitan certificados de depósito y warrants, se consideran comerciantes y están obligados a llevar los libros exigidos por la ley”.

Sr. Bas. — Me parece muy bien. La comisión acepta; es el mismo concepto que ella tiene al respecto, y así quedará todo aclarado.

Sr. Melo. — He escuchado complacido el informe de la comisión. Yo coincido con su juicio; pero ella sabrá también que en Francia se ha discutido mucho con relación a este asunto cuando se sancionó la primera ley de warrants el año 98, y la discusión se mantiene aún, sobre todo en lo que se refiere al warrant agrícola, en razón de que código de comercio francés, como nuestro Código de Comercio, excluye de las compraventas mercantiles las que recaigan sobre frutos de la agricultura; y entonces, para evitar

que pueda hacerse la discusión, conviene que haya un texto que establezca esta obligación para las empresas de llevar libros en su calidad de comerciantes.

Sr. Bas. — No sé si me ha oído el señor diputado. Acabo de manifestar a nombre de la comisión que entiendo que el artículo propuesto aclara el concepto y evita las confusiones, que es lo primero que debe evitar el legislador al desempeñar sus delicadas funciones.

Sr. Presidente. — La honorable Cámara, de acuerdo con el reglamento, debe resolver si entra a ocuparse inmediatamente del artículo propuesto.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se da por aprobado el nuevo artículo propuesto, con el número 31.

Sr. Silveti. — Pido la palabra. Para proponer un nuevo artículo.

Sr. Presidente. — ¿A continuación del que acaba de aprobar la Cámara?

Sr. Silveti. — Sí, señor.

Sr. Presidente. — Puede hacer uso de la palabra el señor diputado.

Sr. Silveti. — Después de los argumentos que hemos escuchado de cada uno de los señores diputados que han tomado parte en el debate, y sobre todo, después de las elocuentes palabras del señor miembro informante de la comisión, en que se han evidenciado en absoluto los beneficios indiscutibles que ha de prestar a la riqueza nacional la implantación del warrant, en la manera que lo legisla la ley que se discute, fuera un olvido, señor presidente, y hasta una injusticia del Congreso argentino, no hacer esta legislación extensiva a las industrias vinícolas en una forma que les haga factible acogerse a sus ventajas manifiestas, ya que también sobre ellas pesa, y quizá más intensamente que en ninguna de las otras, la honda crisis por que atraviesan todas las fuentes de la producción nacional.

Es indudable, señor presidente, que los vinos están comprendidos en los términos generales de la ley, y que incluir-

los en ella, ha sido no sólo el propósito del señor diputado autor del proyecto, sino también de la comisión; pero los vinos estando sometidos a tratamientos y leyes especialísimas, las reglas a las cuales ha de ajustarse para ellos la legislación del warrant, tienen, necesariamente, que amoldarse a estas prácticas y a estos procedimientos, para que puedan ser verdaderamente una garantía de los tomadores y de los prestamistas, en este instrumento de crédito que se considera salvador en estos momentos.

Tratándose de una materia generalmente conocida, al menos en sus lineamientos generales, no creo necesario entrar en detalles relativos a la constitución organoléptica de los vinos, de la cual nacen esos principios y esas reglas generales; y por tanto, me limitaré, en obsequio a la brevedad, a establecer sólo aquello que sea absolutamente indispensable para abonar la especialización que voy a proponer en esta materia, especialización que ha sido aceptada, no sólo por la autoridad indiscutible que representa en esta casa y en el país la comisión de legislación de esta Cámara, sino también robustecida por la del ilustrado autor del proyecto, quienes la aceptan inspirados no sólo en un sentimiento de justicia hacia una de las grandes industrias argentinas, que atraviesa un momento muy difícil actualmente, sino también como un complemento indispensable de la ley.

Un solo artículo comprende la especialización que propongo a la honorable Cámara, con el que pienso que quedan completamente garantizados los efectos que puedan nacer de la legislación del warrant en la forma que aconseja la comisión.

En este artículo, señor presidente, comienzo por ajustarme en absoluto a los principios doctrinarios y prácticos que informan la totalidad del proyecto. No hago, sin embargo, necesaria la traslación de los vinos de las bodegas a los locales de terceros, — y esto es quizá lo fundamental de la reforma, — pero en el depósito lo dejo tanto o más garantizado que en los demás casos generales de la ley.

La excepción que establezco a este respecto se explica porque, como es

notorio, los vinos requieren locales especiales y muy costosos para su guarda, y se encuentran sometidos a tratamientos enológicos permanentes que implican un cuidado técnico constante. Obligar luego a los bodegueros a trasladarlos a un local fuera de la bodega, independientemente, sería sumamente gravoso, al extremo de que casi quedarían excluidos los vinos de los beneficios del warrant, pues habría un verdadero peligro para los tenedores del warrant, toda vez que necesariamente vendría la desvalorización por el desmejoramiento indudable que tendrían que sufrir los productos.

Hago también indispensables, señor presidente, algunos requisitos que no se encuentran establecidos en la legislación y que vienen a facilitar la negociación del warrant, creando nuevas exigencias para la emisión del warrant en los productos de las industrias vinícolas.

Como los vinos, señor presidente, dependen en absoluto de la calidad, clase y condición de las uvas, las cuales son una consecuencia directa de la formación geológica de los terrenos, de la época y forma en que se hace la cosecha, de los mayores o menores cuidados que se tienen en el transporte de la uva, de las condiciones climatéricas del año y, sobre todo, y esto es lo fundamental, de la mayor o menor prolijidad con que se elaboran, a fin de evitar en absoluto los posibles fraudes que pudieran cometerse en las negociaciones del warrant, he agregado como parte integrante del mismo, los análisis correspondientes a los productos sobre los que se emite, con lo que cierro en absoluto las puertas a la mala fe y a la deslealtad en el comercio de este instrumento de crédito, al cual se han empeñado, tanto el autor del proyecto como la comisión, en rodearlo de las mayores garantías.

Finalmente, el agregado que propongo da algunas funciones a la dirección de impuestos internos con referencia a los artículos 25, 19, 16, 80. e inciso 30. del 70.; porque viniendo a quedar el bodeguero como depositario de los mismos efectos aunque con todas las penalidades severas establecidas por la ley, y aún cuando se encuentre bajo la inspección directa de la dirección de

impuestos internos, vendría a desnaturalizar, hasta cierto punto, el principio general que informa la legislación del warrant entre nosotros, como en todas las demás legislaciones. De ahí que se atribuya esta facultad a la dirección de impuestos internos de la Nación, con lo que salvando el principio de desapropiación de los efectos, queda sometido a una exigencia más y con igual garantía que todos los demás casos generales de la ley.

El agregado, pues, que voy a proponer he tenido que redactarlo de acuerdo con las diferentes modificaciones que se han hecho a los artículos ya sancionados.

Pido que se lea.

—Se lee:

“Art. 32. — No será indispensable el traslado a almacenes de terceros para la expedición de los certificados de depósito y warrants en los productos de la industria vinícola, pudiendo el Poder Ejecutivo autorizar a los bodegueros que se constituyen en depositarios, y siempre que reúnan las condiciones establecidas en el artículo 20., a emitir los referidos documentos; los que, para ser negociables, deben previamente ser autorizados por la dirección de Impuestos internos de la Nación del distrito correspondiente.

“Formarán, además, parte integrante de aquéllos los análisis correspondientes al producto sobre que se emiten. A la referida repartición competirán los actos que deben realizar las empresas de depósitos de acuerdo con los artículos 70. (inciso 30.), 80., 17, 19 y 25”.

Sr. Barrera. — Pido la palabra.

Sr. Presidente. — Permítame el señor diputado; no está en discusión el artículo.

La honorable Cámara previamente debe resolver, por una votación, si se ocupa inmediatamente del artículo propuesto o lo pasa a comisión.

—Se vota y resulta afirmativa.

Varios señores diputados. — Que se rectifique la votación.

Sr. Presidente. — Se va a rectificar la votación.

—Se rectifica y resulta nuevamente afirmativa de 43 votos, votando 66 señores diputados.

Sr. Presidente. — Está en discusión el artículo.

Sr. Barrera. — Deseo manifestar, señor presidente, en los términos más expresos, mi adhesión al artículo propuesto, salvo una pequeña modificación que voy a indicar.

Ha sido una preocupación mía desde que se inició la discusión del proyecto de ley de warrants, el establecer un procedimiento que diera por resultado la posibilidad de negociar en esta misma forma los productos de la industria vinícola. De manera que aplaudo el pensamiento del señor diputado y me adhiero a su iniciativa; y tan es esa mi manera de pensar en esta materia, que he contribuido en lo posible, con mis indicaciones, a la formación misma del proyecto.

Pero debo hacer notar que para mantener el depósito en poder de los mismos dueños se exigen los requisitos establecidos en el artículo 2o., lo cual no es posible admitirlo, porque no es posible, por ejemplo, comprobar el capital con que se establece el depósito, desde el momento que no se trata de empresa de esta naturaleza; no es posible exigir comprobación de tarifas, etc., porque allí no se va a cobrar ninguna tarifa; no es posible, tampoco, porque no es del caso, hablar de nombres y domicilios del depositario, ni tampoco, mucho menos, exigir la garantía que se exige a las empresas de depósitos, según el artículo 2o. De manera, entonces, que los requisitos deberán ser únicamente los establecidos en los incisos b y c, únicos de posible aplicación al depósito de vinos en poder del bodeguero.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Voy a votar en favor del artículo propuesto porque creo que él se armoniza con el régimen implantado por la ley y responde a sus propósitos. Lo único que observo es que en el artículo 1o. debemos mencionar los productos industriales, para que dicho artículo concuerde con este nuevo.

En general, las legislaciones sobre esta materia se orientan en dos sistemas. Unas permiten el libre funcionamiento de los almacenes que emiten certificados de depósito y warrants, co-

mo es la ley que rige los docks ingleses. Otras establecen la formalidad de la autorización previa, y algunas agregan todavía a la autorización, la fiscalización, como sucedía en la primitiva ley francesa, que es el tipo al que corresponde nuestra ley. En la ley francesa actual esta inspección del gobierno se ha modificado.

De modo que el artículo tal cual se proyecta concuerda con el régimen de la ley en discusión, porque no es cualquier bodega la que podrá emitir estos certificados de depósito o warrant, sino que únicamente lo podrán hacer aquellas autorizadas por el Poder Ejecutivo, con lo que desaparece todo peligro emergente de la emisión.

Por otra parte, estos certificados o documentos, si es que los dueños de los depósitos no obran con la lealtad, seriedad y circunspección requerida, no gozarán del mismo crédito que los certificados emanados de los otros almacenes de depósito; de manera que la defensa, en lo que se refiere a posibles abusos, estará en el descrédito, y la garantía en la circunspección con que obren los dueños de bodegas.

Resultando, pues, que el agregado no aporta peligro ni desnaturaliza el sistema de la ley, voy a votarlo dado que fomenta intereses que todos debemos tener en cuenta en la sanción.

Es todo lo que quería decir. (*Muy bien!*)

Sr. Pastor. — Que se vote, señor presidente.

Sr. Barrera. — Pido la palabra.

Yo entiendo, como he dicho, que no es posible exigir la aplicación de todos los requisitos determinados en el artículo segundo, sino simplemente de los establecidos en los incisos b y c.

En tal sentido, propongo la modificación.

Además, se dice también allí que la administración de Impuestos Internos es la encargada de realizar los actos encomendados a las empresas de depósitos.

Yo desearía que se estableciera lo siguiente, — porque puede muy bien ocurrir que el Poder Ejecutivo encuentre inconveniente designar, para ese efecto, a la administración de Impues-

tos Internos, o porque puede importar para ella un recargo de trabajo, — que sea esta administración la encargada de las funciones, o el funcionario que al efecto designe el Poder Ejecutivo.

Sr. Bas. — Que se vote, señor presidente, en la forma propuesta.

Sr. Presidente. — El señor diputado por San Juan está haciendo uso de la palabra, y no se puede votar hasta que termine.

Sr. Barrera. — Es singular la obstinación de votar sin oír razones. Eso prueba la resolución previa de no atender observaciones y de encastillarse en un amor propio inadecuado.

Yo mantengo, señor presidente, mi indicación, porque me parece que tengo razón.

Sr. Funes (Lucio). — Yo creo que es innecesaria esta indicación, porque es la administración de Impuestos Internos la encargada de intervenir en todas estas operaciones: no se vende vinos sin análisis previo otorgado por dicha repartición, ni se efectúa con ellos operación alguna, sin que haya mediado la intervención de dicha repartición.

Sr. Barrera. — No la excluyo; simplemente facilito su reemplazo a los fines indicados, a juicio del Poder Ejecutivo. Y no estamos hablando de análisis, sino de las funciones del depositario.

Sr. Presidente. — Corresponde votar el artículo en la forma en que lo redactó el señor diputado por Mendoza, doctor Silveti, que ha sido aceptada por la comisión.

—Se vota, y resulta afirmativa.

—Se da por aprobado el artículo 32 ahora 33.

Sr. Barrera. — Pido la palabra.

Entiendo que antes de pasar a las disposiciones penales debe tratarse un artículo que no es de esa índole y que, por un error de colocación, está consignado al final. Es el artículo 36, que nada tiene que ver con las disposiciones penales.

Sr. Presidente. — ¿Acepta la comisión?

Sr. Bas. — El artículo 36 ha quedado de hecho sin efecto después del agregado que se hizo en el artículo 10. Por consiguiente, al llegar la oportunidad, yo me proponía manifestar a la Cámara que este artículo era innecesario.

Sr. Barrera. — Retiro la indicación, puesto que la comisión no mantiene el artículo.

Sr. Presidente. — No está en discusión el artículo 36.

Se ha aprobado el artículo 32, ahora 33.

—En discusión el artículo 33, ahora 34.

Sr. Barrera. — Pido la palabra.

Quiero hacer una observación antes de pasar al artículo 33, ahora 34.

Es sabido que por un precepto constitucional las leyes de la Nación que dicta el Congreso, cuando ellas no pertenecen a los Códigos Civil, de Comercio, Penal o de Minería, son aplicadas únicamente por los jueces federales. Esta ley no puede tener ese significado; debe ser aplicada por todos los jueces ordinarios de la República. Por consiguiente, a fin de obviar dificultades, propongo un artículo en los siguientes términos: "Quedan incorporadas al Código de Comercio las disposiciones de los artículos precedentes".

Sr. Bas. — Pido la palabra.

El señor diputado parte de un concepto constitucional absolutamente equivocado...

Sr. Presidente. — Permítanme; la Cámara debe resolver previamente si se ocupa del nuevo artículo.

Sr. Bas. — Precisamente me voy a referir a él...

Sr. Presidente. — No puede referirse a ese artículo si la Cámara no resuelve ocuparse de él.

Sr. Barrera. — Pero sería bueno oír las razones tan fundamentales...

Sr. Presidente. — Nó, señor diputado; el reglamento establece que la Cá-

mara debe resolver si ha de ocuparse inmediatamente del artículo propuesto. Si la Cámara resuelve no ocuparse de él, no se discutirá; habrá que suspender la consideración del proyecto.

Se va a votar si la Cámara resuelve ocuparse inmediatamente del artículo propuesto por el señor diputado por San Juan.

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Sírvase el señor diputado dictar el artículo.

Sr. Barrera. — “Quedan incorporadas al Código de Comercio las disposiciones de los artículos precedentes”.

Sr. Presidente. — ¿Dónde iría el artículo?

Sr. Barrera. — Como artículo final de lo que se ha votado.

Sr. Presidente. — El artículo 33 ya ha sido aprobado, de manera que es preciso...

Sr. Gallo. — Este artículo debiera ir en todo caso al final de la ley.

Sr. Presidente. — ¿El señor diputado acepta que se suspenda la consideración del artículo para ser tratado al final?

Sr. Barrera. — Como las disposiciones penales debieran incorporarse, según entiendo yo, al Código Penal, no me parece prudente hacer eso.

Sr. Bas. — Pido la palabra.

Yo me veo precisado a oponerme al agregado propuesto por el señor diputado por San Juan, no tanto porque la disposición pudiera significar en sí misma un perjuicio para la ley, sino porque en los fundamentos que le han servido de base ha establecido principios constitucionales absolutamente equivocados e inaceptables.

El artículo 67, inciso 11, de la Constitución establece, entre las atribuciones del Congreso, la de dictar los códigos civil, comercial, penal y de minería, dejando a las respectivas provincias las jurisdicciones locales y, por consiguiente, el dictar sus códigos de procedimientos; lo que quiere decir, que todas las disposiciones legales que no versan sobre estos conceptos fundamentales, se

consideran como “leyes especiales” y, por consiguiente, su aplicación escapa a la jurisdicción local.

Ahora bien, señor presidente; el error fundamental del señor diputado, que conviene aclarar de una vez por todas en esta honorable Cámara, está en cómo considera esta ley.

No puede esta ley tener carácter de “especial”, en el sentido de la Constitución, desde el momento que los puntos que reglamenta están dentro del organismo mismo de los códigos civil y de comercio; ni para convertirla en una ley de naturaleza especial, con jurisdicción distinta a la ordinaria en su aplicación, basta el hecho de que esa ley se dicte por separado, aunque reforme disposiciones de cualquier código fundamental.

Lo que determina el carácter de “ley especial”, no es la forma de la misma, ni el hecho de que se diga que está en el código tal o cual: es la naturaleza del asunto que se legisla.

Es así que cuando tratamos de la ley de warrants, legislamos sobre la garantía real sobre muebles, establecida en distintas condiciones por los códigos civil y de comercio, con sus garantías y privilegios consiguientes. En realidad, legislamos sobre una cuestión de fondo, que afecta principios de los códigos referidos, y de ninguna manera damos una ley especial distinta de aquellos códigos. Luego, pues, por su propia naturaleza, deberá estar cometida a una jurisdicción y a un procedimiento diferentes de los que rigen los casos de jurisdicción federal.

Me he visto obligado, muy a mi pesar, a pronunciar estas pocas palabras para impugnar la proposición del señor diputado, que conceptúo completamente innecesaria, y porque aceptarla en silencio hubiera significado aceptar ese concepto erróneo que desgraciadamente nuestros tribunales han aplicado ya muchas veces, atribuyendo el carácter de “leyes especiales” y asignándoles una jurisdicción también especial a muchas leyes sobre materia esencialmente de orden civil o comercial, por la sola circunstancia de encontrarse legisladas en una ley particular, no obstante que su carácter era esencialmente orgánico.

Expreso, pues, categóricamente mi opinión. Esta no es una ley especial dentro del concepto del artículo 67, inciso 11, de la Constitución. Esta es una ley que modifica principios fundamentales de los Códigos Civil y de Comercio, y por lo tanto, la jurisdicción que corresponde para su conocimiento no es la jurisdicción federal, sino la jurisdicción particular que establece el inciso recordado de la Constitución.

Sr. Frugoni Zabala. — Pido la palabra.

Para apoyar las opiniones del señor miembro informante.

Basta recordar, en efecto, el contenido de los artículos 29 y 30, cuando se hace distinción entre la jurisdicción nacional y la jurisdicción provincial, para comprender claramente que el propósito de la ley es respetar la jurisdicción provincial.

Si la ley no hace distinción entre la jurisdicción provincial y nacional, es bien claro y explícitamente está declarado por el mismo contexto de la ley, que ésta es una ley de derecho común y no una ley de derecho especial.

Por consiguiente, no creo que haya necesidad de ningún agregado. Está perfectamente deslindada la jurisdicción provincial de la nacional por un texto expreso.

Sr. Melo. — Pido la palabra.

Voy a apoyar la indicación del señor diputado por San Juan...

Sr. Barrera. — Iba a pedir la palabra, pero la dejo al señor diputado Melo, para que con su ilustración dilucide este caso jurídico.

Sr. Melo. — Muchas gracias.

Voy a hacer presente, apoyando la indicación hecha por el señor diputado Barrera, que no solamente se trata de textos constitucionales como el artículo 100 de la Constitución, que entrega a la justicia federal los casos regidos por leyes de la Nación, y el inciso 11 del artículo 67, que declara que la aplicación de los códigos queda exceptuada y corresponderá a los tribunales locales según que las personas o las cosas cayeran bajo su jurisdicción, sino que también el Con-

greso al reglamentar tales disposiciones por la ley de 14 de Septiembre de 1863 ha repetido expresamente en el artículo 10. que pertenecen a la competencia de la justicia federal todas aquellas causas que se encuentren especialmente regidas por las leyes que haya sancionado o sancionara el Congreso.

Dice textualmente: "Las que sean especialmente regidas por la Constitución Nacional, las leyes que haya sancionado o sancionara el Congreso y los tratados públicos con naciones extranjeras".

Y todavía agrega en el artículo 15, cuando reglamenta el recurso extraordinario autorizado por la ley de 14 de Septiembre de 1863, con relación a las sentencias pronunciadas por los superiores tribunales de justicia de las provincias, que ese recurso nunca se otorgará cuando se trate de la aplicación de los Códigos Civil, Comercial, Penal o de Minería.

De manera que existe claramente precisado por ley del Congreso cuál es el alcance del precepto de la Constitución; y entonces si no se estableciera claramente una disposición expresa como la que indica el señor diputado Barrera, declarando que esta legislación es complementaria del Código de Comercio, nos encontraríamos con que por mandato del inciso 10. del artículo 10. de la ley de 14 de septiembre recordada, los casos regidos por esta ley especial tendrían que juzgarse por los tribunales federales.

No se trata ya de opiniones; se trata de soluciones contenidas expresamente en textos de la Constitución y de la ley y ante soluciones que revisten este carácter, por muy respetables que sean las consideraciones que nos ha expuesto el señor diputado Bas, con las cuales estoy en parte de acuerdo, debemos tomar las medidas necesarias para que los tribunales ordinarios que deben juzgar, no por opiniones de los señores diputados sino por leyes, puedan, cuando el caso llegue, tomar conocimiento de estos asuntos, porque, de lo contrario, irían a la justicia federal.

Sr. Bas. — Pido la palabra.

No quiero prolongar este debate porque no es la oportunidad, y el asunto es demasiado importante para el tiempo de que disponemos. Deseo no retardar la sanción de la ley trayendo a la discusión cuestiones fundamentales de otro orden.

Mantengo en absoluto las opiniones vertidas. Creo que las disposiciones de esta ley están perfectamente encuadradas dentro del concepto de la Constitución, y que no debe entenderse por leyes especiales sino aquellas cuya materia no está regida por los códigos fundamentales: que es la *materia* y no la *forma* la que fija ese carácter, si bien reconozco nuevamente que la proposición del señor diputado, aunque redundante, no perjudicaría la ley.

Al hacer uso de la palabra, lo he hecho con el objeto de que no quede de ninguna manera, por lo menos con el asentimiento de la comisión, el concepto de que porque una ley sea dictada fuera de los principios de las formas codificadas, pierda su carácter de ley de fondo, y salga de la jurisdicción correspondiente a las provincias.

Entonces, dentro de este criterio, no tengo inconveniente en que se acepte el agregado.

Sr. Barrera. — Pido la palabra.

De la misma manera que el señor miembro informante* de la comisión quiere salvar lo que, en su concepto, es la verdad constitucional, yo me voy a permitir, señor presidente, y pido disculpa a la Cámara, porque no se trata de una cátedra de instrucción cívica, leer el artículo 100 de la Constitución que dice: "Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación (no dice leyes especiales) con la reserva hecha en el inciso 11 del artículo 67".

"Y por las leyes de la Nación", dice, cualesquiera que ellas sean con excepción de los Códigos Civil, Penal, Comercial y de Minería, únicas leyes que son materia de la reserva mencionada.

Y me extraña que un distinguido abogado como el señor diputado doctor Bas, sostenga de un modo tan absoluto lo contrario, cuando los mismos tribu-

nales a cuyos fallos él se ha referido, me dan la razón.

Si no se incluye este precepto aquí, sólo los jueces federales podrán aplicar esta ley. Y sobre todo, si esto fuera discutible, ¿Porqué no establecerlo expresamente para evitar toda dificultad?

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo propuesto por el señor diputado por San Juan.

—Se vota, y resulta afirmativa.

Sr. Presidente. — Este artículo figurará como artículo 34.

—En discusión el artículo 33, ahora 35.

—No haciéndose observación, se da por aprobado.

Sr. Barrera. — ¿Qué artículo es el que se ha aprobado recién?

Sr. Secretario Zambrano. — El artículo 33 del despacho.

Sr. Presidente. — ¿El señor diputado tiene alguna observación fundamental que hacer?

Sr. Barrera. — Eso depende del criterio con que se aprecien las observaciones, señor presidente.

Sr. Presidente. — Si el señor diputado lo desea, dada la forma en que se viene haciendo la sanción se va a leer nuevamente.

Sr. Bas. — Ya está aprobado, señor presidente.

Sr. Presidente. — El señor diputado pide que se lea nuevamente para hacer una observación.

Sr. Bas. — Que pida reconsideración.

Sr. Presidente. — No es el caso, señor diputado, dada la forma en que se vienen aprobando los artículos.

—Se lee nuevamente el artículo 33 del despacho.

Sr. Barrera. — Observo, señor presidente, que según la redacción, se establecen penas para cuando los efectos se retiren del depósito gravando-

los como propios; es decir, que cuando se retiren sin gravarlos como propios, no hay sanción penal.

Desearía que el señor miembro informante me explicara el verdadero alcance de esa expresión.

Sr. Bas. — En primer lugar, está el artículo 32 donde se establecen las penalidades relativas al abandono de los artículos.

Sr. Barrera. — ¿De modo que en el abandono está incluido el caso de retiro de los efectos a que me refiero?

Sr. Bas. — Permítame. Voy a explicarle al señor diputado.

Decía que el artículo 32 se refiere al abandono. El artículo 33 habla de los depositarios a que se refiere el artículo anterior, que enajenen o retiren del depósito, gravando como propios los bienes depositados.

Lo que se castiga aquí con una penalidad mayor, no es el hecho material del retiro para volver a traer las mercaderías al día siguiente, por cualquier circunstancia del momento, puesto que el depositario para la misma conservación de los productos puede sacarlos y volverlos a llevar. Lo que se trata de castigar es que se enajenen los productos o se saquen gravándolos como propios, porque en este caso se establece o se crea a favor de un tercero, derechos sobre un artículo que no le pertenece al depositario y que está colocado bajo la garantía de la ley.

Entonces, pues, no vamos a castigar con esta medida en términos generales el hecho de que un depositario saque los productos y los vuelva a traer.

Sr. Barrera. — ¿De manera que se le permite al depositario sacarlos y volverlos a traer, no obstante que el depósito debe reunir determinadas condiciones para autorizarlo?

Sr. Bas. — El depositario es responsable de los artículos que recibe en depósito, y no le podemos prohibir que si cae una lluvia que perjudique a las mercaderías, o un rayo que queme el depósito, las lleve a otra parte; y si lo cree necesario, las traslade a otro depósito en mejores condiciones. Son medidas conservatorias, necesarias; de

manera que si le prohibiéramos en absoluto que sacara los artículos, lo imposibilitaríamos de tomar medidas propias para su conservación.

Lo que se castiga es que se saquen las mercaderías gravándolas como propias.

Sr. Presidente. — ¿Propone alguna modificación el señor diputado?

Sr. Barrera. — Nó, señor presidente: deseaba solamente una explicación.

Sr. Presidente. — No se puede pedir que se vuelva a considerar un artículo aprobado para solicitar explicaciones. Creía que el señor diputado iba a proponer una modificación.

Sr. Barrera. — Iba a proponerla, si de las explicaciones resultara necesario; pero si el señor presidente cree que no puedo preguntar...

Sr. Presidente. — Es que el artículo está ya aprobado.

Sr. Barrera. — Desearía también que se estableciera una sanción penal para el caso en que se transmitiera en cualquier forma el uso o posesión de los efectos.

Sr. Bas. — Aquí se dice: “que enajene”.

Sr. Barrera. — Enajenar no es transferir el uso o posesión de los artículos en cualquier forma.

Sr. Bas. — Al decir “el que los grave”, se entiende en uso, en usufructo o en prenda, o en cualquier forma.

Sr. Barrera. — Gravamen no es todo uso; gravamen no tiene un significado tan lato.

Sr. Bas. — En el artículo tiene ese concepto general.

Sr. Barrera. — Yo creo que debe decir “en cualquier forma se transfiera el uso o posesión de los artículos”.

Sr. Oliver. — El señor diputado podría poner el caso práctico para ilustrar a la Cámara.

Entiendo que se refiere al caso en que sin gravar ni enajenar las cosas, las saca y las da a otro para que las use.

Sr. Bas. — Ese es un caso de respon-

sabilidad del depositario, para el cual se han establecido disposiciones especiales.

Sr. Barrera. — Ese acto no implica enajenación ni gravamen, y, sin embargo, es una falta grave. El arrendamiento, el concordato, etc., no son propiamente gravámenes.

Sr. Bas. — El depositario, por ley tiene penalidades generales, y en los casos de ésta, las penalidades son severas.

Sr. Barrera. — Explicado por la comisión el amplio significado en que han sido empleados los términos del artículo y dado el apuro que se nota para terminar, me abstengo de hacer ninguna proposición.

Sr. Presidente. — El señor diputado por San Juan no propone nada, de manera que queda aprobado el artículo.

—En discusión el artículo 34, ahora 36.

Sr. Presidente. — ¿Desea hacer uso de la palabra el señor diputado?

Sr. Barrera. — Acostumbro a proceder siempre con toda circunspección.

Sr. Presidente. — Sí, señor; y la presidencia también procede en igual forma.

Sr. Barrera. — Entonces, no veo motivo para la pregunta oficiosa del señor presidente.

Sr. Presidente. — Como el señor diputado objeta todos los artículos, le pregunto si sobre este desea hacer uso de la palabra, antes de darlo por aprobado, porque hay una resolución de la Cámara para aprobar todo artículo que no sea observado.

Sr. Barrera. — Pero el señor presidente se particulariza conmigo.

Sr. Presidente. — Sí, señor, porque el señor diputado es el que lleva la objeción al proyecto despachado por la comisión.

Sr. Barrera. — He dado la respuesta.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo.

—En discusión el artículo 35, ahora 37.

Sr. Silveti. — Pido la palabra.

Voy a proponer a la Cámara, para ser consecuente con el artículo aceptado antes, la excepción para las bodegas, las cuales no pueden estar en la situación de las demás casas de depósito a que se refiere esta ley.

Si incluimos a las bodegas en este artículo, nos encontraremos con que el warrant será imposible de emitir, toda vez que no se puede hacer el traslado de los vinos.

Sr. Presidente. — ¿Qué propone el señor diputado?

Sr. Silveti. — Propongo que se diga: “Quedan exceptuados los depósitos a que se refieren los artículos 3 y 32”.

Sr. Presidente. — ¿Propone eso el señor diputado como artículo nuevo o como agregado final al que se discute?

Sr. Silveti. — Como agregado final.

Sr. Presidente. — ¿Acepta la comisión?

Sr. Bas. — Sí, señor presidente.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el artículo, con el agregado propuesto por el señor diputado por Mendoza.

Sr. Secretario Zambrano. — El artículo 36 ha sido retirado.

El artículo 37, ahora 38, es de forma.

Sr. Funes (Lucio). — Pido la palabra.

Para hacer una pequeña indicación.

De acuerdo con las modificaciones que ha aceptado la honorable Cámara, agregando este beneficio de la ley a los vinos, habría que modificar el artículo 10. poniendo también “productos industriales”, para que queden comprendidos los vinos.

Sr. Presidente. — ¿El señor diputado propone la reconsideración del artículo 10.?

Sr. Funes (Lucio). — Sí, señor.

Varios señores diputados. — Ya está comprendido.

Sr. Frugoni Zabala. — Ya está comprendido en la modificación que se hizo en la sesión anterior al artículo 10. Dice: “frutos o productos agrícolas,

ganaderos, forestales, mineros o de manufacturas nacionales, etc.”

Sr. Funes (Lúcio). — Está bien; no insisto.

Sr. Barrera. — Pido la palabra.

Yo creo que para ser lógica la honorable Cámara con la sanción que ha dado respecto del artículo que propuse para determinar la competencia de los tribunales en la parte comercial, debería establecer también que las disposiciones penales establecidas en esta ley quedan incorporadas al Código Penal.

Sr. Presidente. — ¿El señor diputado propone eso como último artículo?

Sr. Barrera. — Sí, señor.

Sr. Presidente. — Sírvase el señor secretario leer el artículo como queda.

Sr. Secretario Zambrano. — Agregar como artículo final, antes del de forma, con el número 38, el siguiente: “Decláranse incorporadas al Código Penal las disposiciones comprendidas en los artículos 34, 35, 36 y 37 de la presente ley”.

Varios señores diputados. — Todas las disposiciones penales.

—Se aprueba el artículo nuevo (38) en la forma leída.

Sr. Presidente. — Queda aprobado el proyecto.

Se levanta la sesión.

—Así se hace, siendo las 7 y 50 p. m.